

(«Boletín Oficial del Estado» de 10 de noviembre) y 13 de julio de 1982, los correspondientes al Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados;

Vistos el Real Decreto 228/1980, de 18 de enero, el Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones administrativas y demás disposiciones complementarias;

Considerando que, las Ordenes de 29 de octubre de 1980 y 13 de julio de 1982, recogían el resto de los beneficios fiscales solicitados y que, en virtud de la sentencia mencionada se han de ampliar los mismos,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos y en cumplimiento de dicha sentencia, ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se amplían los beneficios fiscales concedidos a las Empresas «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Sociedad Anónima»; «Unión Eléctrica, Sociedad Anónima»; «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima»; y «Centrales Térmicas del Norte de España, Terminor, Sociedad Anónima», por Ordenes de este Departamento de 29 de octubre de 1980 y 13 de julio de 1982, con el siguiente:

Reducción del 95 por 100 de la base imponible en el Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que grave las ampliaciones de capital en los términos establecidos en el artículo segundo, apartado c), del Real Decreto 228/1980, de 18 de enero.

Segundo.—Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía y Hacienda en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 23 de septiembre de 1988.—P. D. (Orden de 31 de julio de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

24514 *ORDEN de 26 de septiembre de 1988 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, a la Empresa «Fotomecánica Rubio, Sociedad Anónima Laboral».*

Vista la instancia formulada por el representante de «Fotomecánica Rubio, S.A.L.», con C.I.F. A-13051560, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales, y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del día 3 de enero de 1987), sobre tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades Anónimas Laborales en virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1986, de 25 de abril;

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 15/1986, de 25 de abril, y que la Entidad solicitante se encuentra inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Anónimas Laborales, habiéndole sido asignado el número 3.728 de inscripción,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Tributos, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero.—Con arreglo a las disposiciones legales anteriormente mencionadas se conceden a la Sociedad Anónima Laboral, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los siguientes beneficios fiscales:

a) Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se devenguen por las operaciones de constitución y aumento de capital.

b) Igual bonificación, para las que se devenguen por la adquisición, por cualquier medio admitido en derecho, de bienes provenientes de la Empresa de que procedan la mayoría de los socios trabajadores de la Sociedad Anónima Laboral.

c) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documentados, para las que se devenguen por operaciones de constitución de préstamos sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, incluso los representados por obligaciones, cuando su importe se destine a la realización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo de su actividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura de constitución y podrán ser prorrogados en los supuestos previstos en el artículo 4.º del Real Decreto 2696/1986.

Segundo.—Igualmente gozará de libertad de amortización referida a los elementos del activo, en cuanto estén afectos a su actividad, durante

los cinco primeros años improrrogables, contados a partir del primer ejercicio económico que se inicie una vez que la Sociedad haya adquirido el carácter de Sociedad Anónima Laboral con arreglo a la Ley 15/1986, de 25 de abril.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.—P. D., el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

24515 *ORDEN de 28 de septiembre de 1988 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación número 313/1985, interpuesto por don Ramón Cortasa Tarreda.*

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación número 313/1985, interpuesto por don Ramón Cortasa Tarreda, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 10 de noviembre de 1984, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de junio de 1982, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra Acuerdo de este Centro de 25 de enero de 1982, por el que se le impuso una sanción de 25.001 pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 21 de diciembre de 1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que en la apelación formulada por don Ramón Cortasa Tarreda, contra la sentencia que el 10 de noviembre de 1984, dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) de la Audiencia Nacional, debemos revocar y revocamos dicha sentencia y, en su lugar, declaramos la nulidad de la Resolución emanada del Delegado del Gobierno de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos con fecha 25 de enero de 1982, así como de la Orden del Subsecretario de Economía y Hacienda firmada el 1 de junio del mismo año, por no ser conformes a derecho, todo ello sin pronunciamiento alguno respecto del pago de las costas procesales en ambas instancias.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de septiembre de 1988.—P. D. (Orden de 11 de febrero de 1983), el Secretario de Estado de Hacienda, José Borrell Fontelles.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en CAMPSA.

24516 *ORDEN de 30 de septiembre de 1988 por la que se declara la extinción y subsiguiente eliminación del Registro Especial de Entidades de Previsión Social de la Entidad denominada Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical (MPS-860).*

Ilmo. Sr.: Al amparo de la derogada Ley de 6 de diciembre de 1941 y el derogado Reglamento para su aplicación, de 26 de mayo de 1943, el Montepío de Funcionarios de la Organización Sindical, se inscribió por Resolución de 18 de enero de 1946, de la Dirección General de Previsión, con el número 860 en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social (hoy Registro Especial del artículo 40 de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, y artículo 13 del Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Entidades de Previsión Social).

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 26 de febrero de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), la citada Entidad queda extinguida por integración en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, asumiendo ésta última todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de los que aquélla fuera titular con anterioridad a la integración, atribuyéndose el ejercicio de las funciones relativas al extinguido Montepío, a los órganos competentes, en cada caso, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

Examinados los preceptos de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre Ordenación del Seguro Privado, y Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Entidades de Previsión Social, así como el informe favorable de este Centro directivo y a propuesta de V. I.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la baja en el Registro Especial del artículo 40 de la citada Ley de 2 de agosto de 1984 (artículo